



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

179

FORMA A-54

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2009.

ACTOR: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE AGUASCALIENTES.

**SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.**

En México, Distrito Federal, treinta de diciembre de dos mil nueve, **se da cuenta a los Ministros Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil nueve, con el escrito y anexos de Héctor Salvador Hernández Gallegos, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, depositado el veintidós del indicado mes en la oficina de correos de la localidad, recibido el veintiocho siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal y registrado con el número **53234**. Conste.

México, Distrito Federal, treinta de diciembre de dos mil nueve.

De conformidad con los artículos 56 y 58, fracciones I y II, del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el primero de abril de dos mil ocho, la Comisión de Receso que suscribe acuerda:

Con el escrito y anexos de Héctor Salvador Hernández Gallegos, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, **fórmese y regístrese** el expediente relativo a la controversia constitucional que plantea en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la citada entidad federativa, así como de otras autoridades; y **una vez que dé inicio el primer período de sesiones de este Alto Tribunal, correspondiente al año dos mil diez, devuélvanse los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal para que se provea lo relativo al turno de este asunto; no obstante ello, durante el segundo periodo de receso de este año, esta Comisión proveerá lo**

conducente al trámite de este asunto, ante las características particulares de la demanda inicial, en donde se solicita la suspensión de los actos cuya invalidez se demanda.

En consecuencia, visto el escrito y anexos de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo primero, 11, párrafos primero y segundo y, 31 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, téngase por presentado al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, con el carácter que ostenta, promoviendo la presente controversia constitucional; por señalado el domicilio que indica en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, como delegados a las personas que menciona y por exhibidas las documentales que acompañan al oficio de cuenta.

Por otra parte, a efecto de proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, se toma en cuenta lo siguiente:

Primero. En el escrito de demanda el promovente plantea la invalidez de los siguientes actos:

"1. Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, se demanda el siguiente acto:

El oficio OSFAGS/01/2009/702 de fecha 19 de agosto de 2009 el cual contiene un pliego de observaciones que vulnera el principio de división de poderes estatuido en nuestro marco normativo fundamental e invade de manera flagrante la competencia, facultades y atribuciones de mi representado.

El procedimiento de fiscalización seguido en contra de mí representado y del que deriva el oficio también controvertido OSFAGS/01/2009/702 de fecha 19 de agosto



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

de 2009 procedimiento en el que reiteradamente se violó la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Aguascalientes que lo rige al haberse impedido que la entidad fiscalizada ofreciera las pruebas conducentes y formulara argumentaciones en vías de alegato que permitieran comprobar, por una parte, la clara división de competencias existente entre mí representado y el Congreso Local en el proceso de revisión de la cuenta pública y, por la otra, la absoluta legalidad de los actos realizados por su parte, en los procedimientos seguidos para el ejercicio de su presupuesto, las violaciones a la ley del procedimiento que dejaron sin defensa a la entidad fiscalizada.

2. De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Sexagésima Legislatura del Estado de Aguascalientes se demanda el siguiente acto:

- El dictamen de la cuenta pública de mí representado correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2007, sin fecha, notificado a mí representado mediante oficio 3867 correspondiente al expediente I-E-3-09 en fecha diez de noviembre de 2009, signado por el Secretario General de la Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.

3. De la Honorable Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, se demanda el siguiente acto:

- El decreto número 304 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 09 de noviembre de 2009, por medio del cual se declara revisada y aprobada la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral y se le ordena a mí representado el cumplimiento de diversas acciones en total invasión de la esfera competencial, facultades y atribuciones de un órgano constitucional autónomo, como lo es mí representado.

4. Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, se demanda el siguiente acto:

La publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del Decreto número 304 emitido por la Honorable Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con lo

que se le da publicidad al decreto invasor de las facultades y atribuciones propias de mí representada por parte de la Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes.”

Segundo. Del análisis integral de la demanda, esta Comisión de Receso advierte que, en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, de la lectura integral de la demanda se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1° y 10, fracción I, de la propia ley y 105, fracción I de la propia Constitución Federal, consistente en la falta de legitimación activa del órgano promovente para iniciar el presente medio de control constitucional.

Los preceptos señalados, son del siguiente tenor:

“Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley”.

“Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”

“Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

(...)”

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:

a).- La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b).- La Federación y un municipio;

c).- El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d).- Un Estado y otro;

e).- Un Estado y el Distrito Federal;

f).- El Distrito Federal y un municipio;

g).- Dos municipios de diversos Estados;

h).- Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

i).- Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales;

j).- Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y

k).- Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a



que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.”

En relación con la citada causa de improcedencia, el Tribunal Pleno ha emitido los criterios de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO.- Del análisis de la evolución legislativa que en nuestros textos constitucionales ha tenido el medio de control constitucional denominado *controversia constitucional*, se pueden apreciar las siguientes etapas: 1. En la primera, se concibió sólo para resolver las que se presentaren entre una Entidad Federada y otra; 2. En la segunda etapa, se contemplaron, además de las antes mencionadas, aquéllas que pudiesen suscitarse entre los Poderes de un mismo Estado y las que se suscitaran entre la Federación y uno o más Estados; 3. En la tercera, se sumaron a las anteriores, los supuestos relativos a aquéllas que se pudieren suscitar entre dos o más Estados y el Distrito Federal y las que se suscitasen entre órganos de gobierno del Distrito Federal. En la actualidad, el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amplía los supuestos para incluir a los Municipios, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la Unión, a cualquiera de sus Cámaras, y en su caso, a la Comisión Permanente. Pues bien, de lo anterior se colige que la tutela jurídica de este instrumento procesal de carácter constitucional, es la protección del ámbito de atribuciones que la misma Ley Suprema prevé para los órganos originarios del Estado, es decir, aquéllos que derivan del sistema



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

federal y del principio de división de Poderes a que se refieren los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122, de la propia Constitución y no así a los órganos derivados o legales, pues estos últimos no son creados ni tienen demarcada su competencia en la Ley Fundamental; sin embargo, no por ello puede estimarse que no están sujetos al medio de control, ya que, si bien el espectro de la tutela jurídica se da en lo particular, para preservar la esfera competencial de aquéllos y no de éstos, en lo general se da para preservar el orden establecido en la Constitución Federal, a que también se encuentran sujetos los entes públicos creados por leyes secundarias u ordinarias".

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.- Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación”.

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y LEGITIMACIÓN PASIVA.- De la finalidad perseguida con la figura de la controversia constitucional, el espectro de su tutela jurídica y su armonización con los artículos 40, 41 y 49, en relación con el 115, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que podrán tener legitimación activa para ejercer la acción constitucional a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la propia Ley Suprema, de manera genérica: La Federación, una Entidad Federada, un Municipio y el Distrito Federal (que corresponden a los niveles de gobierno establecidos en la Constitución Federal); el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, cualesquiera de las Cámaras de éste o la Comisión Permanente (Poderes Federales); los Poderes de una misma Entidad Federada (Poderes locales); y por último, los órganos de gobierno del Distrito Federal, porque precisamente estos órganos primarios del Estado, son los que pueden reclamar la invalidez de normas generales o actos que estimen violatorios del ámbito competencial que para ellos prevé la Carta Magna. En consecuencia, los órganos derivados, en ningún caso, podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional. Sin embargo, en cuanto a la legitimación pasiva para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere, necesariamente, ser un órgano originario del Estado, por lo que, en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al principio de supremacía constitucional, a la finalidad perseguida con este instrumento procesal y al espectro de su tutela jurídica”.

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.- La legitimación en la causa, entendida como el derecho sustantivo para





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

poder ejercer la acción, y la legitimación en el proceso, entendida como la capacidad para representar a una de las partes en el procedimiento, son aspectos de carácter procesal que, para el caso de las controversias constitucionales, se cumplen de la siguiente manera: 1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 10, fracción I de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal, solamente tienen derecho para acudir a la vía de controversia constitucional las Entidades, Poderes u órganos a que se refiere el citado precepto fundamental; de esto se sigue que son estos entes públicos a los que, con tal carácter, les asiste el derecho para ejercer la acción de referencia; y 2. De conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria, atento el texto de la norma y el orden de los supuestos que prevé, el órgano jurisdiccional, primero debe analizar si la representación de quien promueve a nombre de la entidad, Poder u órgano, se encuentra consignada en ley y, en todo caso, podrá entonces presumirse dicha representación y capacidad, salvo prueba en contrario".

"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.- Conforme al artículo 105, fracción I de la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre dos o más niveles de gobierno (Federación, Estado o Municipio) o entre dos o más Poderes, sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales emitidas por una entidad, Poder u órgano, cuando la cuestión debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias; por otra parte, la fracción I del artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, establece que tendrá el carácter de parte actora en las controversias constitucionales,

la entidad, Poder u órgano que promueva la controversia. De dichas disposiciones se advierte que no todo órgano público podrá acudir a este mecanismo de control constitucional, ni cualquier acto podrá ser materia de impugnación, ya que en estos procedimientos constitucionales se tiende a preservar, esencialmente, la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Por tanto, acorde con la propia naturaleza de estas acciones y de los fines que se persiguen, los organismos públicos descentralizados carecen de legitimación para promover controversias constitucionales, pues aunque forman parte de la administración pública en cuanto atienden con sus propios recursos necesidades colectivas, son entes distintos al Poder Ejecutivo al no tener por objeto el despacho de los negocios relacionados con las atribuciones de este Poder”

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONALES. LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA PARTE ACTORA CONSTITUYE CAUSA DE IMPROCEDENCIA.- Si bien la falta de legitimación no está expresamente considerada como causa de improcedencia dentro del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, también, la fracción VIII dispone que dicha improcedencia puede derivar de alguna disposición de la propia ley. Por tanto, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º y 10, fracción I de la Ley Reglamentaria que rige este procedimiento, sólo las entidades, Poderes u órganos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal podrán promover la acción de controversia constitucional y si la parte promovente no tiene este carácter, es claro entonces que ésta no puede ejercer la acción constitucional de mérito y que este motivo de improcedencia deriva de la ley en cita. Asimismo, si el promovente también carece de facultades para representar al ente público, en términos de lo dispuesto por la legislación ordinaria que lo rige y no hay motivo para presumirla, es evidente que no se





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 119/2009.

FORMA A-54

184

surten los extremos del artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria, que establece los medios para acreditar la representación y capacidad de los promoventes; y de ahí que también, por esta causa, surja la improcedencia de la vía de la propia ley. En estas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria”.

De los preceptos y criterio jurídico señalados, se advierte que la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la Materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que prevé su artículo 19, sino también el conjunto de normas que la integran y al propio sistema que rige este medio de control.

En este tenor se tiene que, tratándose de la legitimación activa, este Alto Tribunal al resolver los recursos de reclamación 58/2007-PL, 154/2006-PL, 234/2006-PL, 305/2006-PL, 376/2006-PL, 365/2006-PL, 15/2007-PL y 54/2009-CA, entre otros, todos derivados de diversas controversias constitucionales, ha sostenido el criterio mayoritario en el sentido de que sólo podrán acudir a esta vía, a demandar la invalidez de actos o normas que consideren atentatorios de su ámbito constitucional de competencia, o bien, que estimen rebasan el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas en favor de tales órganos, las entidades, poderes u órganos que consigna el citado numeral constitucional.

Asimismo, de las tesis y de las ejecutorias en comento, este Alto Tribunal ha sostenido que el objeto de tutela de este medio de control constitucional es, primordialmente, la protección del ámbito competencial

que la Norma Fundamental concede a los órganos originarios del Estado, que derivan del sistema federal y del principio de división de Poderes enmarcado en los artículos 40, 41 y 49, en relación con los diversos 115, 116 y 122 de la propia Norma Fundamental, que se encuentran enumerados en el invocado artículo 105 constitucional, esto es, a aquéllos que provienen o emanan directamente de la división de Poderes propia de la forma de gobierno que rige al país y del sistema federal en el que éste se encuentra cimentado, cuyo ámbito competencial se encuentra delimitado en la Constitución Federal, lo que significa que deben concatenarse ambos aspectos.

Así es que, por la naturaleza propia de estos juicios constitucionales y el espectro de su tutela jurídica, consistente, principalmente, en la salvaguarda del ámbito constitucional de competencia de los órganos primarios del Estado, la sola circunstancia de que un órgano tenga delimitado su ámbito de atribuciones en la Constitución local, como en la especie, por sí sola, no le otorga la legitimación activa necesaria para acudir a la vía de controversia constitucional, ya que para ello es necesario que, además de lo anterior, dicho órgano emane directamente del sistema federal y del principio de división del poder público que subyace en el Estado Mexicano, al ser éste precisamente su objeto principal de tutela, lo que no acontece en el caso de los órganos autónomos estatales como el ahora recurrente.

En tal orden de ideas, deviene inconcuso que si la demanda fue promovida por un ente denominado Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, órgano que no se encuentra expresamente previsto como uno de los





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

sujetos legitimados para promover una controversia constitucional por el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal, la misma resulta notoriamente improcedente, pues como ya se dijo, tratándose de la legitimación activa, únicamente cuentan con ella los sujetos que se enumeran en el multicitado precepto de la Norma Fundamental y que tienen la característica de ser órganos originarios del Estado.

Derivado de lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 1° y 10, fracción I, de la propia ley y 105, fracción I de la Constitución Federal; dado que al no contemplarse en el aludido numeral constitucional la procedencia de una controversia promovida por un órgano constitucional autónomo estatal y por no tratarse de un órgano originario del Estado; por tanto, lo conducente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente.

No pasa por alto para esta Comisión de Receso, las manifestaciones del ente promovente en cuanto a que, debido a su naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo estatal y a diversos criterios de este Alto Tribunal, es que debe reconocérsele legitimación para iniciar este medio de control constitucional, puesto que, como ya se señaló, conforme al criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo los entes expresamente reconocidos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal y originarios que derivan del sistema federal y del principio de división de poderes, se encuentran legitimados activamente para iniciar este medio de control constitucional, lo que excluye a los órganos constitucionales autónomos

estatales por no reunir dichas características, al no ser uno de los poderes de las entidades federativas y por ende, sujetos legitimados para iniciar este medio de control.

Por lo anterior, se está en el caso de desechar la demanda de controversia constitucional hecha valer, ante la falta de legitimación activa del ente público promovente.

No obstante lo anterior, los Ministros integrantes de esta Comisión de Receso, de conformidad con el artículo 56, quinto párrafo del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan a salvo su personal criterio en cuanto al desechamiento decretado, puesto que este se realiza en acatamiento al criterio mayoritario sustentado por este Tribunal Constitucional.

En consecuencia, con apoyo en los artículos 19, fracción VIII, en relación con el 1º y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia y 105, fracción I, de la Constitución Federal, se acuerda:

I. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por Héctor Salvador Hernández Gallegos, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

II. Notifíquese por lista y mediante oficio al promovente.

III. Una vez que cause estado este acuerdo, **archívese el expediente como asunto concluido.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IV. Por la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional y de conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, **se habilitan los días inhábiles que se requieran para llevar a cabo las notificaciones de este acuerdo.**

Lo proveyeron y firman los **Ministros Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil nueve, que actúan con la licenciada **Mónica Fernanda Estevané Nuñez**, Secretaria de la citada Comisión, que da fe.



[Firmas manuscritas de Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo]

A

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Esta foja corresponde al proveído de treinta de diciembre de dos mil nueve, dictado por los **Ministros Olga María Sánchez Cordero de García Villegas y José de Jesús Gudiño Pelayo**, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de Nación, correspondiente al segundo periodo de dos mil nueve, en la controversia constitucional **119/2009**, promovida por Héctor Salvador Hernández Gallegos, en su carácter de Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Conste.

JGTR. 2

[Firma manuscrita]